



REVISTA DE DERECHO

EL CODIGO DE ETICA PROFESIONAL

RICARDO SERRANO LOPEZ DE HEREDIA*

Ex-profesor de Derecho Procesal
Universidad de Concepción

SUMARIO. 1.- Lo saludábamos; 2.- Insuficiencia del control ético; 3.- El Colegio de Abogados. Su potestad disciplinaria; 4.- Características del sistema; 5.- Los Tribunales de Justicia. Su órbita de actuación; 6.- Campo de aplicación de la potestad disciplinaria; 7.- Actuación no excluyente; 8.- Situaciones específicas; 9.- Ausencia de codificación; 10.- El Código de Ética Profesional; 11.- Características; 12.- Su importancia; 13.- Su órbita de aplicación; 14.- El Decreto Ley Nº 3.621. Los Tribunales de Justicia y la ética profesional; 15.- El Colegio de Abogados, Asociación Gremial.

1. Con el mismo título de hoy escribimos, hace ya más de treinta años, en el número 67 de nuestra Revista.

Saludábamos así el advenimiento del Código "que como un iluminado mensaje del nuevo año, nos dicta una serena lección de permanente inspiración". Por disposición del Colegio de Abogados, éste comenzaría a regir el 1º de enero de 1949.

Su trascendencia justificaba, plenamente, la promesa solemne de cumplir fielmente sus preceptos, que desde entonces debían hacer los nuevos abogados.

El paso del tiempo nos permite contemplarlo ahora, después de haber orientado las decisiones del Colegio durante más de tres décadas.

Más que el análisis particular de sus disposiciones, presenta interés destacar el rol que le ha correspondido desempeñar, para lo cual es absolutamente indispensable conocer la situación existente en esta materia al momento de su dictación.

2. El ejercicio de la abogacía aparece regulado desde antiguo por normas cuya observancia se impone como obligatoria.

Su transgresión puede traer aparejada la correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal, materia cuyo conocimiento ha correspondido siempre a nuestros Tribunales de Justicia.

* Ex profesor titular Deontología Profesional, Universidad de Concepción.
Ex profesor titular Derecho Procesal, Universidad Católica de Santiago.

Pero aparte de los casos que originan una responsabilidad legal de esta especie, derivados, generalmente, de la relación entre el profesional y su cliente, existe todo un conjunto de principios de orden ético sin cuya estricta observancia se desvirtúa la alta finalidad de la abogacía.

En nuestro concepto la mejor comprobación de su existencia la da nuestro propio legislador al establecer que las facultades disciplinarias de los tribunales alcanzan a los abogados, señalando por vía ejemplar interesantes situaciones en que éstas deberán ejercerse y penetrando incluso en el terreno de la cortesía que debe guardarse a los colegas. No obstante, el campo propio de estas facultades, de escasa aplicación en la práctica, aparece limitado a la actuación del abogado ante un Tribunal. Así, la observancia de los principios éticos quedaba en la mayor parte de sus aspectos al margen de todo control.

3. La situación expuesta varió, fundamentalmente, con el advenimiento de un nuevo organismo: el Colegio de Abogados de Chile.

Entregada a éste, como una de sus primordiales funciones, la de velar por el prestigio y la corrección profesional, se le dotó de facultades disciplinarias que le permitían cumplir tan alta finalidad.

Fue creado por el Decreto Ley Nº 406, de 19 de marzo de 1925, posteriormente reemplazado por la Ley Nº 4.409 de 8 de septiembre de 1928, llamada, como las que le siguieron, Ley Orgánica del Colegio de Abogados.

Los objetivos de la institución están señalados en la exposición de motivos: "Con escasísimas modificaciones de pequeña o ninguna importancia, sus disposiciones corresponden a las redactadas por el Instituto de Abogados de Santiago, con la colaboración de los profesores más prestigiosos, los profesionales más eminentes y los más altos miembros de la magistratura judicial. El espíritu que lo ha inspirado es el de aprovechar la experiencia de otras naciones, robustecer la colaboración de jueces y abogados, dignificar la profesión de estos últimos, poner atajo a su ejercicio por personas incompetentes, indignas o negligentes, fomentar el estudio del Derecho y propender, en suma, a la mejor, más rápida y más eficaz administración de justicia".

En la disposición precisamente signada con la letra a) del artículo 12 de su Ley Orgánica se consignaba la función disciplinaria de la Orden, caracterizada por su amplitud, tanto en su ámbito de aplicación como en las medidas que en uso de la misma podía aplicar.

Sin limitarse sus fronteras, el inmenso campo propio de tan especial facultad abarcaba las múltiples situaciones susceptibles de originar una responsabilidad derivada del ejercicio profesional, comprendiéndose por primera vez las normas de naturaleza puramente ética. Situaciones reguladas hasta entonces por la sola conciencia del profesional pasaron a ser controladas por el Colegio, integrándose a la órbita propia de sus facultades disciplinarias.

El establecimiento de este control ético, que marcó una etapa en el ejercicio profesional, constituye un motivo de legítimo orgullo para los abogados chilenos, ya que ellos por propia iniciativa propiciaron la creación del Colegio, invistiéndolo de estas facultades disciplinarias, en uso de las cuales podía llegarse hasta la cancelación de su título. En esta

forma los abogados, voluntariamente, palabra que deseamos subrayar, al propiciar la creación del Colegio, sometieron su conducta a los más estrictos principios morales, convencidos de que al hacerlo avanzaban, decididamente, en el campo de la dignificación profesional.

4. La creación del Colegio, legalmente investido de potestad disciplinaria, significó el inicio de un sistema cuya importancia radicaba, fundamentalmente, en dos aspectos: la intervención de un nuevo organismo con atribuciones de esta especie y la amplia esfera propia de las mismas. A la actuación de los Tribunales de Justicia, limitada por la competencia que la ley les asigna, se sumaba el Colegio, cuyas resoluciones, de acuerdo a su naturaleza, se traducían en medidas disciplinarias. Aparte de ello, su creación marcó la apertura de una tendencia a la colegiación en las otras profesiones, cuyas entidades representativas se formaron siguiendo su modelo.

Estructurada la Orden bajo el régimen de colegiación obligatoria, como requisito para el ejercicio de la abogacía, se abandonó todo un sistema de extrema libertad profesional para colocar al abogado bajo la vigilancia de la nueva entidad. No podían éstos sustraerse a su tuición disciplinaria y a la obligatoriedad de las sanciones impuestas por los Consejos respectivos. Estas oscilaban desde una amonestación hasta la cancelación del título,

5. La entrega a la Orden de esta importante función no interfirió en modo alguno las facultades propias de nuestros Tribunales de Justicia para conocer de materias relativas a la responsabilidad de estos profesionales.

Tal situación se señalaba textualmente en el inicio del artículo 16 de su Ley Orgánica al establecer el ámbito propio de la potestad disciplinaria: "Sin perjuicio de las facultades que corresponden a los Tribunales de Justicia..."

Por el contrario, estos últimos no eran ajenos al desarrollo de la función disciplinaria del Colegio. Así, correspondía a la Corte Suprema, en pleno, conocer de la apelación interpuesta en contra del acuerdo del Consejo General que cancelaba el título profesional y en determinados casos las Cortes de Apelaciones posibilitarían la actuación de los Consejos, dirimiendo las inhabilidades formuladas en contra de sus miembros.

6. El campo de aplicación de estas facultades se señalaba en el referido artículo 16, expresando que un Consejo podía corregir "todo acto desdoroso para la profesión, abusivo de su ejercicio o incompatible con la dignidad y cultura de los debates judiciales".

Al leerlo llama de inmediato la atención la sencillez del lenguaje empleado por el legislador en la redacción de este precepto de tan hondo contenido.

Descartando la posibilidad de incorporar al texto legal una serie de conductas estimadas reprobables, el legislador optó por esta afortunada redacción, que destaca la extensión de su campo de aplicación. La amplitud de éste aparece como esencial característica de las facultades disciplinarias y responde a las razones que originaron su establecimiento.

Así, simplemente, mediante estas normas fundamentales, tan genéricamente enunciadas en este precepto, de fácil comprensión y sin distinguos que pudieran limitar su aplicación práctica, se señalaba el marco en que el Colegio debía encuadrar su actuación. Su transgresión importaba una incorrección que éste sancionaba en el desempeño de su precisa misión de velar por la dignidad profesional.

La palabra "ética", empleada como significativa de estas facultades, sólo apareció años después incorporada a la legislación profesional.

Presenta interés consignar que esta disposición fue, generalmente, adoptada por los colegios profesionales creados posteriormente. Sus respectivas leyes orgánicas la reprodujeron literalmente, con variantes propias de la naturaleza de cada profesión.

7. De lo expuesto aparece que, como ya se ha dicho, el establecimiento de estas facultades significó incorporar al control del entonces nuevo organismo un extenso grupo de actuaciones irregulares que se encontraban marginadas de la competencia propia de los Tribunales de Justicia.

Pero el campo disciplinario de la Orden era de tal amplitud que, además de este sector de actuaciones, quedaban comprendidos en él los hechos cuyo conocimiento corresponde normalmente a los Tribunales de Justicia en el ejercicio de la competencia que les es propia.

Aún más, la actuación de éstos no era excluyente y tanto es así que uno de los "motivos graves" que permitían acordar la cancelación del título era precisamente "haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los artículos 231 y 232 del Código Penal o en los Títulos IV y IX del Libro II del mismo Código" (Artículo 19). Así, la pena impuesta por el Tribunal no impedía una posterior medida disciplinaria acordada por el Colegio.

8. En forma excepcional se contemplaban disposiciones específicas que se apartaban del precepto de orden general ya analizado. Era el caso del abogado "que aparente ser el patrocinante de un asunto sin serlo en realidad o que preste su firma para cumplir con las exigencias legales" (Artículo 53).

Además de esa solitaria disposición, en que la sanción se presentaba como obligatoria, se señalaban otras situaciones consideradas como "motivos graves" que permitían acordar la cancelación del título, como la circunstancia de que un abogado hubiere sido suspendido tres o más veces o que se aceptare una acusación en su contra por alguno de los delitos establecidos en los artículos 231 y 232 del Código Penal (Artículo 19).

9. La situación descrita subsistió durante los primeros veintitrés años de existencia de la Orden, en que ésta desempeñó su función disciplinaria sin un Código de Ética Profesional que orientara sus decisiones. Ello desmiente la idea muy generalizada de que desde un principio se contó con un ordenamiento de esta especie. Su ausencia durante un lapso tan prolongado permite constatar que existiendo claras disposiciones legales que las consagren y regulen, estas facultades pueden ejercerse sin este código, cuya existencia no es absolutamente necesaria. Ello no signi-

ficaba desconocer la conveniencia de contar con un código de esta clase, por las múltiples ventajas que presenta. Tal conveniencia fue acentuándose con el transcurso del tiempo, que aconsejaba la dictación de nuevos preceptos, a fin de que estos conceptos, a menudo sutiles e imprecisos, que constituyen el deber profesional, se tradujeran en disposiciones escritas susceptibles de ser conocidas por todos. Respondiendo a este anhelo nació el Código que nos preocupa.

10. Aprobado en 1948, su texto fue tomado de un proyecto acordado por la Federación Interamericana de Abogados, que venía preocupándose de esta materia desde su fundación en 1940. La Barra Mexicana, comisionada para la elaboración del anteproyecto respectivo, lo presentó en noviembre de 1947 a la Quinta Conferencia celebrada en Lima, que le prestó su aprobación con leves modificaciones, acordando recomendar su adopción a las entidades afiliadas.

El Consejo General lo estudió acuciosamente, con participación de los Consejos Provinciales, introduciéndole diversas modificaciones. En sesión del 28 de octubre de 1948 aprobó el Código de Ética Profesional, estableciendo que "rige para los abogados y los Consejos Provinciales de todo el país" y que sus normas "se aplican a todo el ejercicio de la abogacía y la especialización profesional no exime de ellas".

Diferente en tantos aspectos del resto de los códigos hasta entonces conocidos, lo es también en cuanto a su origen, ya que no se trata de una ley y su aprobación emanó de la facultad propia del Consejo General que le permitía "dictar resoluciones de carácter general, relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado".

Su obligatoriedad deriva de la forma en que fue adoptado y por tratarse de normas expresamente consideradas como de orden ético su transgresión se sancionaba por el Colegio con las medidas disciplinarias establecidas en su Ley Orgánica. Así se explica que en el Código no se señalen, ni en un artículo de aplicación general ni en cada una de sus disposiciones, las medidas correspondientes a su infracción.

11. Código de tan especial naturaleza se aparta por la novedad de su contenido de cuantos habíamos conocido. Sus cuarenta y ocho artículos, distribuidos en cuatro secciones, se leen con agrado y, al hacerlo, se observa con satisfacción que sus redactores sortearon con éxito la tarea de traducir a fórmulas sobrias y puras los principios de rectitud que guían al abogado en los complejos caminos de su vida profesional.

Como una norma fundamental se establece que para el abogado "no solamente es un derecho, sino un deber combatir, por todos los medios lícitos, la conducta moralmente censurable de jueces y colegas" (Artículo 2º).

El precepto, con adecuada adaptación, fue, posteriormente, adoptado por la generalidad de los códigos de esta especie elaborados por los otros Colegios Profesionales.

Acorde con la finalidad del código, el cumplimiento de este deber, calificado como "de defensa del honor profesional", permite llegar a reprimir situaciones que, por su gravedad, impiden que un abogado las ampare con su silencio.

La obligación de lealtad cede ante consideraciones de orden superior, aflorando el principio predominante en la deontología profesional en cuanto a considerar la función social de la abogacía antes que la situación personal de quienes la ejercen.

12. La importancia del Código se manifiesta, primeramente, en la fijación de un concepto claro acerca de los principios fundamentales que informan el ejercicio de la profesión y de los deberes del abogado. Su sistematización e integración en un solo cuerpo permite un cabal conocimiento de los mismos. En seguida, posibilita el juzgamiento de los casos sometidos a los Consejos, teniendo a la vista las normas que los propios abogados se dictaron con el objeto de inspirar en ellas su diario quehacer profesional. En este aspecto el Código facilitó los fundamentos de sus resoluciones, superando una etapa en que esta labor, de suyo compleja y delicada, se conformaba al solo criterio de los consejeros sentenciadores. Y, aparte del ámbito profesional, la sociedad, con su sola lectura, puede conocer y apreciar, en todo lo grande de su significado, los caracteres esenciales de la profesión a que acude para la defensa de sus derechos.

Su aplicación práctica puede constatarse mediante el análisis de las decisiones del Colegio, las que, cuando así se acordaba, se publicaban en una Sección 5ª de la 2ª Parte de la "Revista de Derecho, Jurisprudencia y Ciencias Sociales", que por iniciativa del Consejo General de la Orden se creó con el objeto de divulgar la jurisprudencia sobre ética y responsabilidad profesional.

13. Debe destacarse, finalmente, que la adopción del Código de Ética Profesional no significó encuadrar la órbita de las facultades disciplinarias dentro de los contornos de sus disposiciones. Menos aún podría sostenerse que tal limitación hubiere constituido el motivo de su establecimiento, alterando así un sistema cuya eficacia radica fundamentalmente en su amplitud. Por el contrario, la adopción de nuevos preceptos obligatorios impone su aplicación en los casos que éstos contemplan. La vasta esfera de actuación del Colegio se conservó así en toda su extensión junto al Código que el tiempo reclamaba.

Al precepto genérico y a la disposición específica ya conocida, que mantuvieron su plena vigencia, se agregaron las normas contenidas en el entonces nuevo Código.

14. La situación explicada en las líneas precedentes fue objeto de un cambio trascendental al promulgarse el Decreto Ley Nº 3.621 de 7 de febrero de 1981, que suprimió el régimen de colegiación obligatoria, transformando los Colegios Profesionales en Asociaciones Gremiales, regidas por el Decreto Ley Nº 2.757 de 29 de junio de 1979, que las establece bajo un régimen de libertad de afiliación y desafiliación.

La nueva legislación derogó, expresamente, todas las disposiciones legales que permitían a los colegios conocer y sancionar las infracciones a la ética profesional, trasladando a los Tribunales de Justicia la competencia para conocer de esta materia, considerada como de naturaleza contencioso civil. Por otra parte, se estudia un anteproyecto de Código de Ética Profesional común para todas las profesiones, que integraría la legislación derivada del nuevo sistema.

Comprendiendo a los profesionales en general, el Decreto Ley Nº 3.621 establece que la tramitación de estos asuntos se ajustará al procedimiento sumario, con particularidades que se advierten principalmente en cuanto al contenido y efectos de la sentencia definitiva.

Conforme a su texto, "toda persona que fuere afectada por un acto desdoroso, abusivo o contrario a la ética, cometido por un profesional en el ejercicio de su profesión, podrá recurrir a los Tribunales de Justicia en demanda de la aplicación de las sanciones que actualmente contemplen para estos actos la Ley Orgánica del Colegio respectivo o las normas de ética vigentes". (Artículo 4º, inciso 1º).

El Tribunal puede estimar que existe mérito suficiente para instruir proceso por crimen o simple delito de acción pública. Esta resolución repercute tanto en materia de competencia como en cuanto al procedimiento, pues, en tal caso, "pasará los antecedentes al Juez del Crimen correspondiente, o instruirá él mismo el proceso respectivo si tuviere competencia para ello". (Inciso 5º).

Finalmente, "la sentencia que se dicte en este procedimiento producirá, en lo pertinente, cosa juzgada en el juicio civil que se iniciare para cobrar los perjuicios causados". (Inciso 3º).

15. Sin su plena potestad disciplinaria, el Colegio de Abogados como Asociación Gremial sólo posee actualmente las atribuciones que sus disposiciones estatutarias contemplan, permitiéndole la adopción de medidas que alcanzan a sus asociados y que en ningún caso afectan al ejercicio mismo de la profesión. Así, el abogado puede ser suspendido de su calidad de asociado y, en casos graves, expulsado de la Institución.

Puede, además, "solicitar a la autoridad que corresponda las medidas de suspensión del ejercicio profesional o de cancelación del título de aquellos abogados que, a juicio del Directorio, hayan cometido actos desdorosos para la profesión y deducir las demás acciones que procedan".

Tan delicada facultad nos parece de difícil aplicación a la práctica, en atención a que su ejercicio supone el conocimiento de antecedentes responsablemente proporcionados por el afectado y la colaboración del mismo en el curso de la causa en que se decida intervenir, existiendo la posibilidad de fallos adversos que en ciertos casos pueden menoscabar la respetabilidad del Colegio.